



San Salvador, 28 de febrero de 2019

**Pronunciamiento de la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos,
licenciada Raquel Caballero de Guevara, con ocasión de la
Propuesta de Ley de Reconciliación Nacional de la Comisión Ad hoc.**

El pasado veintidós de febrero de 2019, a través de las redes sociales trascendió que el diputado Rodolfo Antonio Parker Soto, Coordinador de la Comisión Ad hoc para el Estudio de las Implicaciones de la Sentencia que declaró Inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, presentó una propuesta de Ley de Reconciliación Nacional.

En ese contexto, en su sentencia, respecto de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, ocurridos durante el conflicto armado y atribuidos a ambas partes; la Sala de lo Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa¹: (i) Garantizar el acceso a la información pública (asegurar el esclarecimiento de hechos y la búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido); (ii) Dar respuesta a las exigencias de las víctimas en cuanto a las investigaciones, el enjuiciamiento, el esclarecimiento de la verdad y la sanción a los responsables; y, (iii) Establecer las medidas de reparación integral para las víctimas, tomando en cuenta los parámetros de la sentencia y los estándares de la justicia transicional desarrollados fundamentalmente en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional.

Es por ello que observo con absoluto desconcierto la propuesta de ley que servirá como base o insumo para el trabajo de la Comisión Ad hoc, que en franca desavenencia con el mandato otorgado en la referida sentencia, hace formulaciones contrarias al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos fundamentales contemplados en nuestra Constitución, y omite gravemente otros aspectos.

Sin ánimo de enfrascarme en un análisis pormenorizado de su contenido, ya que el mismo no es per sé meritorio, causa a mi persona especial preocupación el afán expresado desde los considerandos y en el contenido de la propuesta, de desmarcarse de la obligatoriedad aparejada a los tratados internacionales y principios de irretroactividad de las leyes en materia penal, seguridad jurídica, presunción de inocencia y debido proceso entre otros, aduciendo la prevalencia de la norma constitucional sobre ellos. Lo anterior pareciera soslayar que ha sido precisamente el máximo intérprete de la norma constitucional quien ha afirmado para este caso específico, por un lado, la absoluta coherencia de la normativa internacional y de dichos principios con los derechos fundamentales previstos en la norma normarum; y por otro lado, la absoluta incompatibilidad con la norma constitucional de la figura de amnistía de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, ocurridos durante el conflicto armado.

¹ Sentencia de Inconstitucionalidad 44-2013/145-2013, de 13.07.16, considerando 4.B. pár. 2, p. 35





San Salvador, 28 de febrero de 2019

La propuesta en cuestión impone además límites temporales altamente cuestionables, para la consecución de la justicia y pareciera que desatinadamente se encuentra formulada a la medida de los intereses de quienes deben enfrentar las consecuencias de sus actos y no de las víctimas. Artículo tras artículo de dicha propuesta dan cuenta de inexcusables desaciertos, algunos de los cuales señalaré a continuación en afán meramente ilustrativo:

1. Artículo 1, se repite la misma fórmula de la Ley de Amnistía que fue expulsada de nuestro ordenamiento jurídico en tanto concede tal gracia en forma amplia, absoluta e incondicional, a favor de todas las personas que en cualquier forma hayan participado en delitos (...);
2. Artículo 2, se establece que la finalidad de la investigación será únicamente que “se conozca la verdad de lo ocurrido”, y abre la posibilidad de sanción “distinta a la prisión”. No reconoce el derecho a la reparación civil por los daños ocasionados, como se establece en el art. 2 Cn.;
3. Artículo 5, se crea la Comisión Nacional de Reconciliación sin representación de las víctimas ni sus organizaciones;
4. Artículo 12, se establece que en cualquier estado del proceso, de oficio o a petición de parte, se dictará la extinción de la acción y de la responsabilidad penal por prescripción; señala, asimismo, que las “personas de la tercera edad” o con enfermedades crónicas o terminales –que para los casos en cuestión podrían ser casi la totalidad de los indiciados- que resultaren responsables de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad “no estarán sujetos a sanción penal alguna. En ningún caso se impondrán penas accesorias”. Se impone el criterio de prescripción de la acción penal en crímenes de lesa humanidad.
5. Artículo 15, se establece que la reparación integral “será responsabilidad del Estado”, desconociendo que el art. 245 Cn, establece que la responsabilidad del servidor público es personal y solo de forma subsidiaria para el Estado.
6. Artículo 16, se restringe el concepto de víctima a solo la directamente ofendida y su pariente dentro del primer grado de consanguinidad y afinidad y solamente cuando la vida o la integridad personal sea el bien jurídico lesionado. Se desconoce a las víctimas directas e indirectas de otros bienes jurídicos, cuando durante el conflicto armado sufrieron víctimas de todo tipo y de ambas partes.

En ese sentido es menester señalar que la propuesta de ley en comento no satisface en nada los requerimientos establecidos en el mandato de la Sala de lo Constitucional, ni los estándares contenidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni en las declaraciones y tratados de derechos humanos que rigen la materia.





San Salvador, 28 de febrero de 2019

No coloca al centro la dignidad de las víctimas, tal como lo ordenó el referido Tribunal salvadoreño al expresar “La nueva situación que se abre con esta sentencia constitucional pone en evidencia la necesidad de una regulación complementaria para una genuina transición democrática hacia la paz, que respete la dignidad humana y los derechos fundamentales de las víctimas, en especial, los derechos de acceso a la justicia y a la tutela judicial, el derecho a la reparación integral, el derecho a la verdad y la garantía de no repetición de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al DIH”.

Debo además llamar la atención a las diputadas y los diputados de la Honorable Asamblea Legislativa –tal y como lo hice en mi intervención durante la segunda audiencia oral de seguimiento a la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz- por el persistente conflicto de intereses tras nombrar a una Comisión Ad hoc conformada en forma inaudita por algunas personas que han sido señaladas en vinculación a graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. En su quehacer legislativo se ha dejado fuera a las víctimas y a sus representantes.

En mi opinión, la referida propuesta de ley favorece la impunidad, incumple el mandato constitucional otorgado al primer Órgano de Estado y su orientación perpetúa el sufrimiento de quienes han debido enfrentar ignominiosos vejámenes en el conflicto fratricida.

Por lo anterior, con base en el mandato constitucional que me ha sido conferido mediante las atribuciones consignadas en el artículo 194 romano I, ordinales 1º, 3º, 7º y 9º de la Constitución de la República, a la Presidencia y Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, **RECOMIENDO:**

1. Garanticen el cumplimiento del mandato constitucional que les vincula, y el estricto apego a lo dispuesto en la sentencia de la Sala de lo Constitucional pronunciada contra la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, promoviendo la aprobación de legislación en favor de las víctimas, para que accedan a la verdad, a la justicia, a la reparación y a garantías de no repetición. A tales efectos deberán rechazar la consideración de cualquier propuesta que –como acá referida- conculque los derechos fundamentales de las víctimas.
2. Favorezcan un proceso que asegure la discusión pública, abierta, objetiva y participativa, de los extremos normativos pertinentes. Dicho proceso debe poner al centro a las víctimas de ambas partes en el conflicto y su voz, sus intereses, necesidades y derechos humanos y fundamentales deben constituir verdaderos principios rectores.
3. Superen el evidente conflicto de intereses patente en la mayor parte de las personas designadas e integrantes de la comisión Ad Hoc, debiendo asegurar la legitimidad e idoneidad de quienes deberán liderar el cumplimiento de lo mandatado por la Sala de lo Constitucional.

Raquel Caballero de Guevara
Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos



www.pddh.gob.sv